

Sincerar el presupuesto, una tarea urgente

A finales de 2015, pese a las observaciones presentadas por varios analistas, la Asamblea aprobó un Presupuesto General del Estado (PGE) que incluye, a nuestro entender, graves sobrestimaciones en los ingresos fiscales proyectados y, por tanto, una importante subestimación del déficit y de las necesidades de financiamiento para este año. Ahora que el Ministerio de Finanzas ha publicado la ejecución presupuestaria de enero, quedan en evidencia algunas de las sobrestimaciones ya advertidas en su momento y saltan a la vista otras, a raíz de los cambios que se han introducido al PGE aprobado.

La primera alerta tiene que ver con la proyección de ingresos por recaudación de impuestos. En 2016 el Gobierno espera obtener \$15.489 millones por ese concepto, apenas \$215 millones menos (o 1,4% menos) que la recaudación devengada de 2015. Sin embargo, hay varios factores que nos permiten suponer que la recaudación en 2016 será muy inferior que la del año pasado. En primer lugar, en 2015 la amnistía tributaria le permitió al SRI recaudar \$972 millones adicionales, ingreso extraordinario que ya no se repetirá en 2016. En segundo lugar, la fuerte caída de la recaudación tributaria en la segunda mitad de 2015, cuando la economía empezó a registrar contracciones interanuales, parece ser un anticipo de lo que ocurrirá este año. De hecho, entre agosto y diciembre de 2015 (en julio se concentró la mayor parte de los ingresos por la amnistía tributaria, por lo que incluir ese mes distorsionaría el análisis) el SRI recaudó un total de \$4.740 millones, 13% menos que en el mismo período de 2014. Tomando en cuenta esa tendencia y las proyecciones de decrecimiento económico para

2016 (el Banco Mundial proyecta una caída de 2%, en CORDES creemos que la contracción será de 2,9%), prevemos que este año la recaudación del SRI se ubicará por debajo de los \$12.500 millones, muy lejos de la meta de \$14.086 millones que se plantea la institución. En tercer lugar, los ingresos arancelarios en torno a \$2.000 millones que el Gobierno registró en 2015 (muy superiores a los de 2014) se explican en buena parte por las salvaguardias que estuvieron vigentes durante nueve meses completos. En 2016 las salvaguardias, cuyas sobretasas máximas ya se empezaron a desmontar, estarán vigentes sólo hasta junio, a lo que se suma una previsible nueva caída en las importaciones por el menor nivel de actividad.

Más allá de todas las inconsistencias señaladas, las cifras oficiales a enero ya dan cuenta de la sobrestimación en los ingresos tributarios del presupuesto (que son la suma de los impuestos recaudados por el SRI más los aranceles): en el primer mes de 2016 los impuestos devengados sumaron \$1.221 millones, 19% menos que en el mismo mes de 2015. Creemos que la sobrestimación de los ingresos tributarios proyectados en el PGE se acerca a los \$2.000 millones.

La ejecución presupuestaria a enero también deja de manifiesto los cambios que se han hecho al PGE aprobado por la Asamblea. Pese a que el Ministro de Finanzas y el propio Presidente Correa insistieron varias veces en que en 2016 los ingresos petroleros del presupuesto serían nulos y a que los precios del crudo, lejos de recuperarse, han seguido cayendo, ahora el Gobierno proyecta recibir \$2.265 millones por “transferencias y donaciones de capital e inversión” (concepto que se refiere principalmen-

te a ingresos petroleros), \$1.631 millones más que lo previsto originalmente. Dado que el mismo presupuesto contempla, en una línea aparte, un ingreso de \$725 millones por “ventas anticipadas”, no se entiende qué justifica ese incremento previsto en los ingresos no permanentes.

En el PGE codificado, por otra parte, el Ministerio de Finanzas eliminó en los gastos la cuenta de “pasivo circulante” (\$1.559 millones), que en su momento las autoridades dijeron que se refería a atrasos con proveedores del Estado, principalmente empresas del sector petrolero. Pese a que el Gobierno Central arrastra millonarias deudas con sus proveedores (al cierre de 2015 la diferencia entre el gasto devengado y el realmente pagado ronda los \$2.500 millones), en el PGE codificado no hay ninguna cuenta de deuda flotante (o pasivo circulante). Si bien esa omisión no modifica el déficit, ya que se trata de una cuenta de financiamiento, sí altera significativamente las necesidades de financiamiento, que creemos que superarán los \$10.000 millones.

Las sobrestimaciones de ingresos que, a nuestro entender, incluye el PGE 2016 deben ser corregidas cuanto antes para que el Gobierno ejecute sus gastos corrientes y de inversión (el gasto en obras públicas se redujo en \$254 millones adicionales en el presupuesto codificado) sobre una proyección realista. De otra manera, y a la luz de lo que ocurrió el año pasado y de las dificultades para obtener nuevo financiamiento, es muy probable que el Gobierno continúe acumulando atrasos y profundizando un déficit que atenta contra la sostenibilidad de la dolarización.